



ACADEMIA DE LAS CIENCIAS  
Y LAS ARTES MILITARES

Comunicaciones académicas

## *Burden sharing*: el reparto de cargas y los beneficios en los países de la OTAN

*Antonio Fonfría Mesa*

Academia de las Ciencias y las Artes Militares  
Sección de Futuro de las Operaciones Militares

21 de marzo de 2025

### Introducción

Con la aprobación del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN de Madrid se abre una etapa distinta a las anteriores. Cada cambio en las posiciones estratégicas de la Alianza ha supuesto igualmente modificaciones en las exigencias a los países en lo tocante a su aportación al conjunto. Además, implica que los beneficios esperados por cada uno de los miembros también se modifican de manera sustancial.

Históricamente, éste ha sido un debate entre los EE. UU. y los países europeos que pertenecen a la Alianza, ciertamente, pero también ha sido el resultado de tensiones internas entre intereses estadounidenses contrapuestos para compartir más el coste de la seguridad transatlántica sin ceder el liderazgo. Es el fracaso de Washington a la hora de zanjar definitivamente este último debate lo que ha resultado central en esta discusión (Driver, 2016. *Burden sharing and the future of NATO: wandering between two worlds*, *Defense & Security Analysis* 32 (1), 4-18). No obstante, la llegada de Donald Trump en su segundo mandato está removiendo la situación, que junto con la guerra de Ucrania impone mayores esfuerzos al conjunto de la Alianza.

Esta situación conduce al planteamiento de cuestiones relativas a quién, cómo y con cuánto esfuerzo, se soportan las cargas de la OTAN; si los beneficios obtenidos por los países son adecuados con relación a lo que aportan al club; por último, si los indicadores tradicionalmente utilizados para aproximar dichas cargas y beneficios son los más adecuados. Este trabajo trata de aportar una perspectiva novedosa al análisis de dichos aspectos desde un punto de vista teórico, presentando algunas derivadas que se obtienen para las políticas de la Alianza.

## Modelos económicos de Alianza: ¿realmente impactan en el reparto de cargas?

La evolución del entorno estratégico desde la Guerra Fría hasta la actualidad ha cambiado de forma muy sustancial. Con él, la OTAN ha tenido que evolucionar para mantenerse viva moviéndose hacia posiciones que han resultado en diversos conceptos estratégicos, por lo tanto, en distintas maneras de afrontar las situaciones a lo largo del tiempo. Estos cambios han llevado aparejados otros relativos a cuál debería ser el papel que juegan los países miembros de la Alianza en la seguridad del conjunto: aportación de cada país en términos de tropas, material, capacidad de disuasión, financiación, etc.

En este sentido, el debate, continuo e inacabado sobre las cargas de los países – *burden sharing*-, no está exento de sesgos ideológicos y posiciones «cómodas» de algunos miembros, incluso aprovechándose los más pequeños de los más grandes –*free riding*-. Generalmente la literatura ha distinguido tres tipos de estudios con relación a este tema. El primero de ellos se centra en la distribución de los gastos entre los países miembros de la Alianza, tal y como expresan en el trabajo seminal Olson y Zeckhauser (1996, *An economic theory of alliances*, *Review of Economic Statistics*, 48, 266-274). El segundo expone los factores explicativos de la evolución de dicho gasto, normalmente a través de funciones de demanda, como exponen Murdoch y Sandler (1984, *Complementarity, free riding, and the military expenditures of NATO allies*, *Journal of Public Economics*, 25 (1-2), 3-28). El tercero y último analiza cómo las contribuciones de cada uno de los países individualmente se unen para obtener un determinado nivel de defensa para el conjunto, para lo cual se introducen las funciones de composición social del gasto público, siendo aplicadas por Hirschleifer (1983, *From Weakest Link to Best Shot: the Voluntary Provision of Public Goods*, *Public Choice*, 41 (3), 371-386).

En términos generales, y aunque los enfoques son diferentes, se ha considerado la existencia –explícita o implícita-, de una función de demanda derivada de una función de utilidad social, a través de la cual se observa qué factores inciden en el gasto en defensa. En este contexto, se han manejado distintos conceptos del «bien

defensa», definiéndolo como un bien público en la mayor parte de los casos, de manera que la demanda de gasto militar indica en qué forma un país asigna sus recursos entre el bien defensa y otros bienes, con relación a un conjunto de variables explicativas (Hartley y Sandler, 2001. NATO Burden Sharing: Past and Future, *Journal of Peace Research*, vol. 36:6, 665-680).

Dos han sido tradicionalmente los enfoques teóricos más utilizados para aproximar el análisis del gasto en defensa: el modelo de bien público puro y el de producción conjunta. El primero de ellos sostiene que la defensa de los países miembros de la OTAN es un bien público puro ya que se vinculaba a la estrategia de destrucción mutua asegurada –MAD, en sus siglas en inglés-, y que estuvo vigente desde la creación de la OTAN hasta mitad de los años 60. De este modo, el armamento nuclear generaba una situación de consumo de defensa no excluyente entre los aliados. Bien es cierto que provocaba un efecto perverso ya que los países más pobres, que no poseían armamento nuclear se beneficiaban de aquellos que si lo tenían y que, por tanto, realizaban un mayor gasto en defensa, lo cual se vino a denominar la «hipótesis de explotación» de los países más pobres de la Alianza frente a los más ricos (Fonfría y Marín, 2012. Factores explicativos del gasto en defensa de los países de la OTAN, *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, Vol. 1, 11-34).

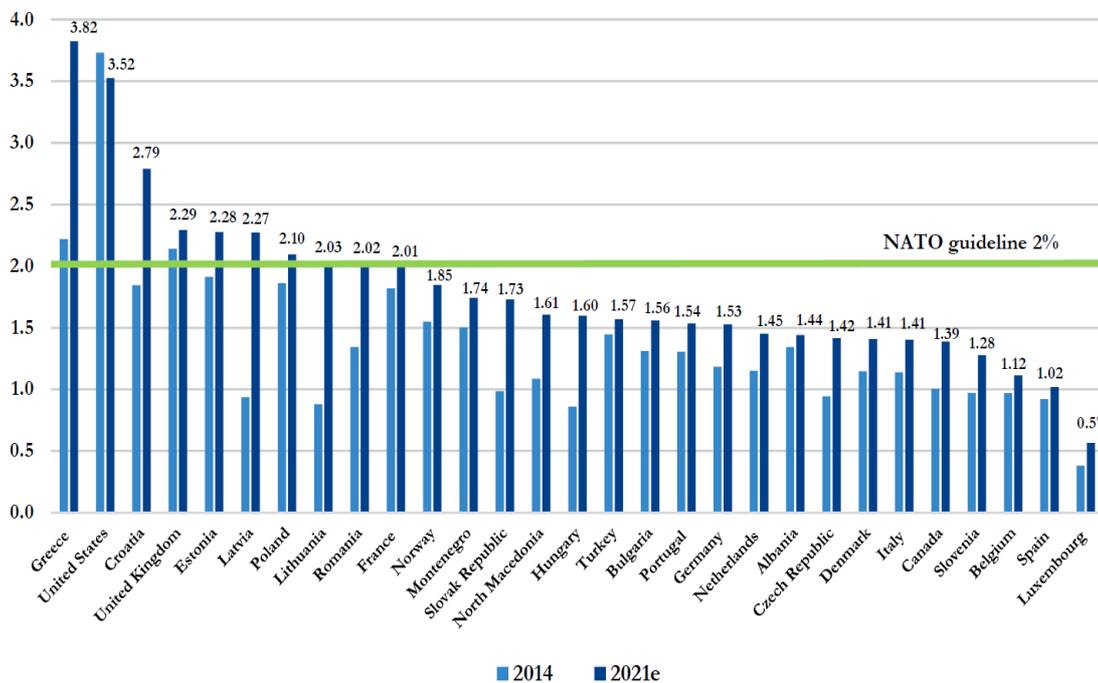
En el segundo caso, el análisis se centra en los efectos que posee sobre el gasto en defensa que un país pertenezca a una alianza militar, de manera que existe un efecto de *spill-in* entre los países aliados (Olson y Zeckhauser, 1966) y cierto nivel de comportamiento de *free rider* en las naciones con menor nivel de renta, derivado de la posibilidad de utilizar los gastos en defensa de los países más ricos en su propio beneficio (Murdoch y Sandler, 1984). Este enfoque supone la existencia de múltiples perspectivas como la de la carrera armamentista, que fue muy utilizada durante la guerra fría o la de las políticas organizativas y la burocracia –véase Mayer (1986. Arms races and war initiation: Some alternatives to the Intriligator-Brito model, *Journal of Conflict Resolution*, 30 (1), 3-28) para el primer enfoque y Kamlet y Mowery (1987. Influences of executive and congressional budgetary priorities 1955-1981, *American Political Science Review*, 81, 155-178), con relación al segundo-.

En este sentido, cabe distinguir, que la perspectiva de producción conjunta se encuentra vinculada a distintas estrategias de la OTAN, que van desde la de respuesta flexible -1967 - 1990-, con sus etapas, hasta la de gestión de crisis, dentro de las cuales el grado de bien público es creciente.

No obstante, además de aspectos puramente estratégicos como los mencionados, debidos a respuestas ante cambios en el escenario internacional, la demanda del

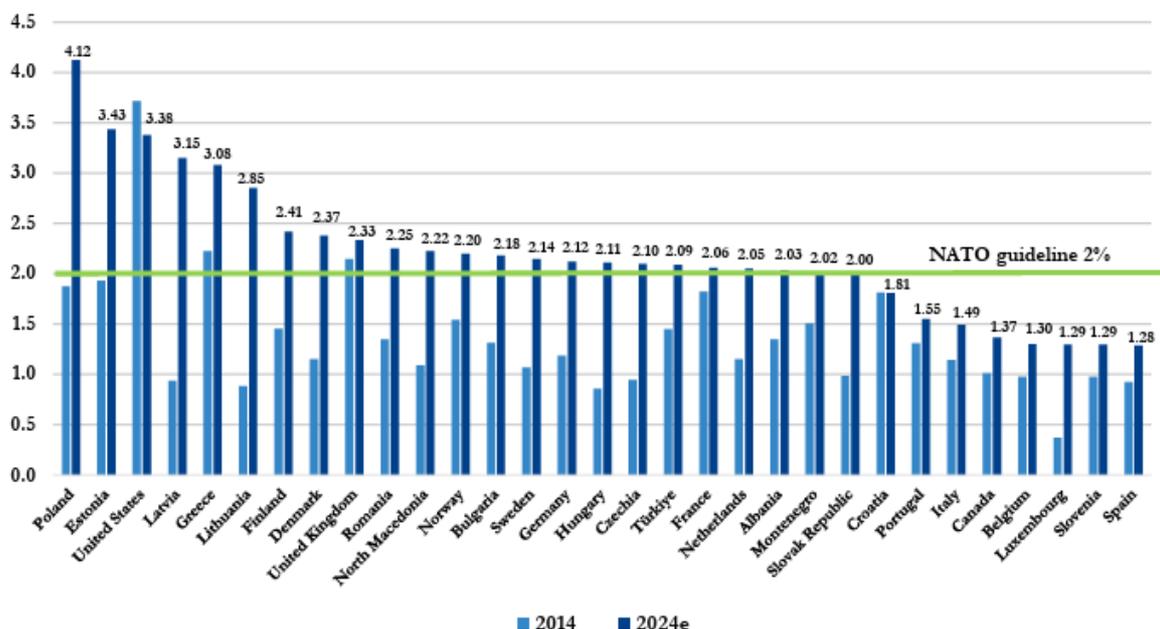
gasto en defensa se ha visto afectada por modificaciones en las preferencias de las sociedades desarrolladas que no admiten elevaciones importantes de aquel (Dudley y Montmarquette, 1981. The demand for military expenditures: An international comparison, *Public Choice*, 37 (1), 5-31). Junto a este aspecto, la sensación de seguridad seguida del final de la Guerra Fría y su resultado económico expresado a través del dividendo de la paz, han generado una situación -particularmente en Europa-, cuyo resultado ha sido doble. Por una parte, la reducción drástica de los presupuestos de defensa y, por otra, un crecimiento muy moderado de los mismos, que se encuentra -en términos de crecimiento-, por debajo de la mitad de la media mundial -puede consultarse los *SIPRI Yearbooks* de diferentes años-.

A partir de la firma de los Acuerdos de Gales en 2014, del cambio de orientación de las preocupaciones exteriores de los EE. UU, de los problemas crecientes con Rusia y China y de la invasión de Ucrania, la OTAN acuerda imprimir un mayor impulso al esfuerzo de los países en el gasto en defensa, marcando un mínimo en el 2% del PIB a alcanzar en el año 2024. Sin embargo, como puede apreciarse en los gráficos 1 y 2, aunque la tendencia es creciente, la mayor parte de los países no habían alcanzado dicho porcentaje en el año 2021, mientras que, a raíz de la guerra de Ucrania, se impulsó el gasto en defensa y la mayor parte de ellos se situaban en el 2%.



Note: Figures for 2021 are estimates.

Gráfico 1.- Gasto en defensa en % del PIB 2014-2021. (Precios y tipos de cambio de 2015)



Note: Figures for 2024 are estimates.

Gráfico 2.- Gasto en defensa en % del PIB 2014-2024. (Precios y tipos de cambio de 2015)

## Medición del *burden sharing*. Propuesta de un indicador sintético

Como se ha expuesto, el debate acerca de cómo medir las aportaciones de los países a la Alianza sigue abierto hoy en día. La perspectiva clásica de input cuantificando a través del esfuerzo sobre el PIB –gasto en defensa con relación al PIB–, se ha extendido y aplicado gracias a su sencillez. Sin embargo, algo similar podría hacerse con otras medidas como por ejemplo el gasto en defensa con relación a la población, por militar, en términos de los presupuestos de cada país, e incluso con relación al gasto total de la OTAN. Si bien estas medidas se utilizan de forma subsidiaria y como vía de minimizar el impacto de no llegar al 2% de muchos de los países miembros, las exigencias suelen ir más allá. Así, se suele bajar al detalle de las inversiones en equipos con relación al gasto total, a la I+D, o al stock de equipos y su antigüedad o el personal y la participación de su coste en el conjunto del presupuesto de defensa (Hartley y Sandler 1999), factores que también toma en consideración la Unión Europea, proponiendo objetivos a alcanzar en línea con los de la OTAN.

Parece lógico que se exija a los países un mínimo de gasto en defensa con relación al PIB, ya que esta ratio muestra el esfuerzo económico que, dado el coste de los sistemas de armas, la cantidad necesaria para ejercer la disuasión, la necesidad de contar con aquellos más modernos y adecuados al tipo de conflictos que muestran una mayor probabilidad y el arsenal de sistemas de los posibles

contrincantes. Resulta igualmente necesario que ese porcentaje se eleve a medida que los riesgos geopolíticos, militares y económicos se hacen más profundos y evidentes (Fonfría y Marín, 2012).

Una segunda perspectiva de medición de esfuerzos es la que se refiere al tipo y cuantía de la estructura de fuerzas que se ponen a disposición de la OTAN. Así, si éstas son de combate o de apoyo, o su capacidad de despliegue y movilidad, son factores de máxima relevancia que suelen ser menos utilizados.

Cabría distinguir otro amplio conjunto de factores que podrían ser utilizados como indicadores de las aportaciones de los países a la Alianza. Entre ellos cabría destacar las contribuciones a infraestructuras comunes, a las crisis de *pacekeeping* o a la participación en otras coaliciones. En este último caso convergen dos aspectos importantes. El primero de ellos es el efecto sustitución de fuerzas y capacidades de la OTAN por otras de instituciones como la ONU. El segundo tiene que ver con la aportación al mantenimiento de la paz, de manera que esta circunstancia supone un ahorro de recursos para la Alianza en forma de no intervención (Bogers y Beeres, 2013. *Mission Afghanistan: Who Bears the Heaviest Burden*, *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 19 (1)) incluyen otro factor como es la cuantificación del riesgo compartido, al igual que Khanna y Sandler (1997. *Conscription, Peace-keeping and Foreign assistance: NATO Burden Sharing in the Post-cold War Era*, *Defence and Peace Economics* 8 (1), 101-121).

Por último, se pueden destacar indicadores relativos al tamaño económico de los países, lo cual apoyaría su capacidad de pago posible y otros que tienen que ver con aspectos civiles, como el apoyo a desastres y la ayuda humanitaria internacional. En estos casos las aportaciones de los países estarían generando estabilidad y evitando futuros problemas socio-económicos, lo cual podría degenerar en circunstancias en las que sería necesaria la intervención militar.

Todas estas medidas adolecen de un problema de enfoque, ya que se centran en aspectos parciales de la aportación de los países. Esta situación genera ciertas dificultades y debates acerca de qué indicador es el apropiado, como se ha apuntado anteriormente. El problema de utilizar un único indicador o varios indicadores de manera aislada es que dan visiones con un elevado sesgo y cada país tiende a utilizarlo de forma que vaya en su propio beneficio y no en el del conjunto, restando así capacidades a la Alianza. Tal y como expresan Bogers y colaboradores:

La evaluación objetiva de la contribución de cada Estado miembro se complica por la ausencia de un único indicador global para cuantificar la contribución multiproducto y multidimensional de las contribuciones individuales de los

aliados a la alianza de la OTAN (Bogers *et al.*, 2022. "NATO Burden Sharing Research along Three Paradigms", *Defence and Peace Economics*, 33 (5), 539).

Para evitar este problema se puede utilizar algún tipo de indicador sintético que resuma un conjunto más o menos amplio de aspectos expresados a través de diversas variables seleccionadas previamente y que aporten una perspectiva global de la aportación de cada país a la Alianza. Este tipo de indicadores ya se utilizan desde hace años, por ejemplo, para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano – IDH-, por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este caso concreto se utilizan cuatro indicadores que se resumen posteriormente en tres y finalmente dan un único número para cada país. Esto permite exponer un ranking de la posición de cada país con relación al resto, así como su evolución temporal.

Bien es cierto que los países que menor esfuerzo económico realizan pueden ver en este tipo de indicador un refugio para evitar incrementar su gasto en defensa. Sin embargo, partiendo de un mínimo que podría fijarse -bien en términos de PIB, población, etc.-, la aplicación de un indicador como el que se propone permite evitar los comportamientos de *free rider*, ya que lo que no se aporta a través de una vía se debe aportar por otras vías. Además, con un indicador compuesto, es posible conocer las fortalezas y debilidades de la Alianza en su conjunto y si las aportaciones diversas de los países permiten obtener un juego de suma superior a cero.

El proceso que podría utilizarse en el caso de la elaboración de un indicador de estas características –similar al mencionado del IDH–, para el caso de la OTAN incluiría los siguientes pasos:

1. *La selección de las variables.* En este caso si se pretende un único indicador final, podrían incluirse variables de muy distinta índole de manera que recogieran un amplio espectro de factores. Por el contrario, si lo que se pretende es centrar algo más el indicador final, cabe la posibilidad de recoger un menor número de aspectos y centrarlo en, por ejemplo, factores económicos o militares. En ambos casos se consigue reducir los sesgos asociados al uso de una única variable.

Como puede observarse, se puede elaborar más de un indicador, de manera que se complementen entre ellos: uno vinculado a factores económicos, otro a materiales, otro a militares, etc. En todos los casos, permite reducir la volatilidad y los sesgos en mayor o menor medida.

2. *La elección del tipo de indicador compuesto.* Con relación a este aspecto dos son las posibilidades que se abren. La primera es conceder el mismo peso para todas las variables que se incluyan en el indicador. Esta opción puede ser adecuada cuando no hay razones objetivas o consenso sobre qué variable puede ser más relevante en el conjunto. En el caso de la Alianza, debido a la relevancia que se le otorga al esfuerzo en defensa y a la menor importancia que toman otras variables como las expuestas anteriormente, puede ser más adecuado que haya diferentes ponderaciones. Sin embargo, este es un punto de amplio debate que ha de resolverse a través de la negociación entre los países o bien con una propuesta externa y aceptada por ellos, ya que puede modificar sustancialmente los resultados obtenidos.
3. *El índice de Contribución.* El indicador compuesto, sería una media geométrica de las variables que se consideren, de manera que tendría la siguiente forma (suponiendo n variables a considerar y una ponderación igual para todas de 1/n):

$$\text{Índice de Contribución} = (I_1^{1/n} * I_2^{1/n} * I_3^{1/n} * \dots)$$

Obviamente puede ampliarse o reducirse el número de ítems en función de los acuerdos a los que se llegase en el seno de la Alianza, o en función de los aspectos que se deseen cuantificar.

4. *Cálculo.* Cada una de las variables posee sus propias unidades, lo cual impone la necesidad de homogeneizar todas ellas y evitar que el resultado final se exprese en cualquier tipo de unidad. Adicionalmente, sería necesario conocer cuáles son los valores máximos y mínimos de cada una de las variables introducidas, de manera que se pueda situar cada país en su posición respecto a dichos valores, de forma que la expresión de esta parte aportaría información acerca de la posición relativa de cada país con relación a unos términos de referencia máximos y mínimos de la siguiente manera:

$$I_i = (X_{\text{efectivo}} - X_{\text{mínimo}}) / (X_{\text{máximo}} - X_{\text{mínimo}})$$

Esta es una forma de normalizar cada variable haciendo que sea homogénea con relación al resto. Igualmente permite que el recorrido del indicador final elaborado se encuentre entre 0 y 1, por lo que es fácilmente interpretable. Así, un valor cercano a cero muestra que el país en cuestión aporta poco a la Alianza. Por el contrario, cuanto más cercano se encuentre el resultado a la unidad mayor será su aportación. Es igualmente posible plantear un *benchmark*, que puede ser la media, mediana o cualquier otra medida a fin de observar que los países que se sitúen por encima de ella aportan más que los que se

posicionan por debajo, como forma de elevar el resultado del conjunto de la Alianza.

5. *Ranking*. La elaboración del ranking con el indicador calculado posee varias ventajas con relación a la situación actual. Entre ellas cabría destacar que considera diversos aspectos –por ejemplo, podría aplicarse a las 3C’s -, lo cual otorga una medida más adecuada que la que puede dar una única variable, ya que no se encuentra sujeta a vaivenes derivados de un cociente, por ejemplo – como ocurre con el gasto en defensa con relación al PIB-. En segundo lugar, permite analizar en cual o cuales de los aspectos se muestran debilidades y corregirlas. Como tercer factor, y una vez alcanzados los acuerdos sobre qué variables incluir, se pueden elaborar distintos índices que recojan aspectos diferentes de la contribución. Por ejemplo, un índice que tenga en cuenta los aspectos de índole económico, otro con aquellos relativos a las capacidades materiales o de personal, etc., como se ha puesto de manifiesto anteriormente.

En definitiva, la construcción de un índice de estas características posee varias ventajas frente a indicadores o variables más sencillas –basadas generalmente en cocientes que se encuentran sujetos a variaciones elevadas y distorsionan los resultados–. Sin embargo, implica la necesidad de alcanzar acuerdos en el seno de la Alianza sobre diversos aspectos, como son las variables a incluir y sus pesos. No obstante, puede aportar algunas ventajas como la menor volatilidad con relación a otros indicadores, la capacidad para considerar aspectos muy distintos en un mismo indicador y la facilidad de interpretación.

## Los beneficios y su medición

Como se ha expuesto, durante la Guerra Fría Guerra, Olson y Zeckhauser (1966) consideran la defensa como un bien público puro. En ese período de tiempo, la equidad entre los países de la OTAN se mostraba a través del reparto de las cargas en proporción al gasto en defensa como porcentaje del PIB. Posteriormente, a partir del desarrollo del Modelo de Producción Conjunta (MPC) elaborado por Sandler y Forbes (1980. *Burden Sharing, Strategy and the Design of NATO*, *Economic Inquiry*, 18 (3), 425-444) el carácter de bien público puro se diluye apareciendo todo un rango de posibilidades hasta los beneficios privados que podían obtener los países. Por ejemplo, algunos desarrollos de armamento convencional que se puedan utilizar para la defensa de costas o perímetros fronterizos poseen las características de un bien privado, ya que se aprovechan por el país que lo genera. Sin embargo, esa misma defensa provee de manera, aunque sea parcial e indirecta, de seguridad al resto de los países de la Alianza por lo que adicionalmente posee características de un bien público.

Pero al igual que se tratan de medir los costes de los países de la Alianza –*burden sharing*, fundamentalmente-, es necesario tratar de aproximar los beneficios tanto colectivos o públicos, como privados. La complejidad de su cuantificación radica en la propia definición de lo que se trata de medir, unido a otros factores como son los rápidos desarrollos tecnológicos, que pueden modificar los equilibrios dentro de la Alianza –ese es el objetivo de la PESCO, el EDF, etc. en el seno de la Unión Europea-, los aspectos geoestratégicos unidos a las amenazas y, por ende, las respuestas que las distintas estrategias de la OTAN han dado a esas situaciones. Este es el caso de la introducción del terrorismo en las últimas estrategias de la Alianza, así como factores unidos al comercio internacional, lo cual conlleva la inclusión de beneficios para los países que anteriormente no se consideraban (véase NATO, 2022. *Strategic Concept*. [www.nato.int/strategic-concept/](http://www.nato.int/strategic-concept/) ).

En términos generales, los gastos realizados por la Alianza generan beneficios que son privados entre los aliados, pero públicos en el seno de la propia Alianza, es decir para el conjunto. Así, los esfuerzos que un país realice en términos de inversiones en sistemas de armas, por ejemplo, van a elevar el nivel de disuasión o defensa del conjunto por lo que el esfuerzo posee una correlación elevada con el beneficio, tanto privado como público. El problema radica en que las preferencias de los aliados no son conocidas; por lo tanto, no es posible conocer su función de utilidad (Bogers *et al.*, 2022), lo cual implica que las medidas de beneficio tienden a ser muy generales.

Tradicionalmente se ha planteado que los beneficios incluyen fundamentalmente la disuasión, la limitación de daños de los países y la protección, de manera que, cuanto más activos posea un país –mayor población, mayor PIB y mayor cantidad de fronteras expuestas–, más tendrá que proteger e igualmente, más acusado será su esfuerzo en defensa (Sandler y Forbes, 1980), por lo que también sería una medición del beneficio el gasto en defensa como porcentaje del PIB, es decir existirá una elevada correlación entre ellos. Pero este principio de la capacidad de pago basada en el PIB no es satisfactorio, ya que, si bien distingue dentro del seno de la Alianza la posición de los países, no aporta información directa de los beneficios.

Posiblemente sea más adecuado realizar dos conjuntos de mediciones sobre los beneficios obtenidos por los países. Un primer conjunto recogería los aspectos tradicionales anteriormente comentados, junto con la disuasión nuclear, base de la disuasión para el conjunto de los países de la OTAN. Sin embargo, al estar concentrada en un reducido número de países puede darse el caso de que la respuesta flexible –y en este caso selectiva–, no genere los resultados de disuasión esperados para todos los países de la Alianza. En este sentido, los beneficios, que

a priori estarían igualmente distribuidos, podrían modificarse en función de parámetros de decisión política.

El segundo conjunto tendría que ver con una aproximación unida a operaciones concretas, de manera que los beneficios específicos de los aliados pueden provenir de la ayuda en caso de catástrofe, el mantenimiento del orden, la protección de activos en el extranjero, frenar la inmigración ilegal o reducir el contrabando de drogas (Sandler, 2005. NATO benefits, burdens and Borders: Comment, *Defence and Peace Economics*, 16:4, 317-321). A ello habría que unir otros efectos relacionados con el mercado de sistemas de defensa unido a las empresas del sector, el comercio internacional, la inversión extranjera y las oportunidades que se abren por la propia pertenencia a la Alianza.

Es importante destacar que los beneficios serán tanto mayores cuanto más eficientes y eficaces sean los países en la realización de sus inversiones y gastos en defensa de manera que puedan alcanzar los objetivos planteados en tiempo y forma -eficacia-, y con el menor uso de recursos posible –eficiencia-. Ambos aspectos son esenciales para una mejor planificación, una distribución óptima de los recursos y una evaluación precisa del rendimiento de los países de la OTAN (Domínguez *et al.*, 2021. "Efficiency evaluation of NATO member nations from a Defence Economics perspective", *Boletín de Estadística e Investigación Operativa*, 37 (3), 183-207).

## Conclusiones

El reconocimiento de la OTAN como organización política sugiere la posibilidad de aplicar modelos de elección pública para ofrecer una interpretación de las alianzas, el reparto de cargas y la ampliación del número de aliados. La elección pública se centra en el impacto de la política de los grupos de interés dentro del complejo político-industrial de la OTAN y cada grupo de interés presente en ella, perseguirá su propio beneficio que no siempre será compatible con el del resto.

Así, en estas líneas se ha expuesto cómo, desde la teoría económica, es posible mejorar el conocimiento de los costes y beneficios de la Alianza y de los países que la forman. Igualmente, se ha propuesto la posibilidad de un indicador sintético que hoy en día no existe pero que podría mejorar las políticas de reparto de cargas, así como los beneficios que pueden obtener los países y, lo que es más importante, las capacidades de la propia OTAN, evitando duplicidades, mejorando los repartos de los costes individuales y aprovechando de manera más adecuada sinergias y economías de escala.

El nuevo Concepto Estratégico implica cambios en el terreno económico y de recursos y nuevas políticas que van a impactar en la toma de decisiones individuales de los países –por ejemplo, incrementando el gasto en defensa. Algo similar ha venido ocurriendo con los diversos cambios estratégicos desde los años 60. En todos los casos se han modificado factores económicos esenciales –*burden sharing*, beneficios esperados y realizados, capacidades puestas a disposición de la Alianza, etc.–, pero no se ha cambiado sustancialmente la manera de medirlos ni de afrontar sus consecuencias. Quizá sea el momento de afrontar este reto. ■

**Nota:** Las ideas y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad del autor, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

© Academia de las Ciencias y las Artes Militares - 2025